

ENERGÍA ■ EL GOVERN RECURRIRÁ EL AUTO JUDICIAL

Una juez suspende el protocolo que impide cortar la luz sin informe social

Acepta la petición de Endesa y considera que el texto incluye medidas anuladas por el Tribunal Constitucional

EFE

Una juez de Barcelona ha suspendido cautelarmente el protocolo de la Generalitat que impide a las empresas suministradoras cortar la luz sin un informe previo de los servicios sociales sobre la situación de riesgo de exclusión, al considerar que incluye medidas anuladas por el Tribunal Constitucional (TC).

En un auto, la titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Barcelona da la razón a Endesa y acuerda suspender cautelarmente, hasta emitir sentencia, el protocolo que la Agència Catalana de Consum acordó para aplicar la Llei de Pobreza Energética de 2015, pese a que varias de sus medidas habían sido anuladas por el TC.

Pese a que la Generalitat ha alegado en el procedimiento que el protocolo no vincula a las suministradoras, la juez advierte de que, «en realidad», lo que pretende la Generalitat es que «sea de obligado cumplimiento», de forma que, si las compañías energéticas no lo respetan, «pueden ser objeto de sanción, como así ocurre el propio protocolo».

«Es indudable que el protocolo establece para las empresas la obligación de seguir prestando el servicio mientras los servicios sociales no emitan el informe que acredite que la persona se encuentra o no en una situación de riesgo de exclusión residencial y, en el caso de que así sea, la empresa no puede continuar con el procedimiento para proceder al corte del suministro», sostiene la juez.

Garantizar el sistema

En el auto, la juez concluye que «la imposibilidad de que se corte el suministro establecida por el protocolo supone para las empresas la obligación de mantener el servicio sin percibir del usuario las tarifas legalmente previstas».



Manifestación en Reus tras la muerte en un incendio de la anciana que se iluminaba con una vela. FOTO: MARINÉ/EFE

«De ahí –añade– que este coste deberá compensarse para garantizar la sostenibilidad del conjunto del sistema eléctrico, compensación que no está prevista que sea cubierta por la Generalitat ni tampoco por los ayuntamientos».

En concreto, la juez pone como ejemplo que el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú acordó en un pleno que el porcentaje de la factura que debe asumir la persona afectada se sitúa en un máximo del 8% de sus ingresos men-

suales, el consistorio el 25%, y el resto –que puede ser de hasta el 75% si el abonado no tiene ingresos–, por la compañía.

Repercusión en otros usuarios

Por este motivo, el tribunal alerta de que, de aplicarse el protocolo, los demás usuarios, «incluidos los de fuera de Catalunya», «puedan ver incrementadas sus facturas para evitar un eventual desequilibrio entre ingresos y costes del sistema derivados de la aplicación del protocolo».

La juez remarca las similitudes entre algunos de los preceptos fijados en el protocolo con los puntos suspendidos por el TC de la Llei de Pobreza Energética.

«Si una norma, con rango de ley, que contiene previsiones similares a las que se incluyen en el protocolo ha sido suspendida por el TC y esa suspensión se ha mantenido de forma razonada, los criterios tenidos en cuenta por el Alto Tribunal para adoptar esta decisión son perfectamente trasladables al caso que nos ocupa», razona la magistrada.

Para la juez, el protocolo «aporta muchas más sombras que luces» y «supone una quiebra del principio constitucional de seguridad jurídica».

La juez, además, obliga a la Agència Catalana de Consuma publicar en su web que el protocolo ha sido suspendido, al menos hasta que se dicte sentencia. El conseller de Empresa, Jordi Baiget, ha anunciado que la Generalitat recurrirá el auto judicial. Baiget recordó que la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ya presentó recurso contencioso administrativo contra el mismo protocolo en otro juzgado de Barcelona, que aceptó la demanda pero no declaró la suspensión cautelar.

EL APUNTE

El Gobierno aprueba hoy el decreto estatal

Después del impacto social y mediático del fallecimiento hace un mes de una mujer de 81 años en Reus, a causa de un incendio por usar velas al no disponer de suministro, el Gobierno español aprobará mañana un real decreto en el que se plasmará el acuerdo al que ha llegado con el PSOE sobre el nuevo modelo de financiación del bono social eléctrico, similar al que ya puso en marcha la Generalitat y que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC). En el acuerdo del Gobierno del PP con el PSOE se pactó igualmente

reformular de forma urgente la ley del sector eléctrico y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares «extremadamente vulnerables».

El borrador del real decreto determina que los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas deberán acreditar mediante la expedición de un documento que un consumidor es «vulnerable severo», lo que le protegerá de los cortes de luz.

La norma incluye varias modificaciones de la ley del sector, entre ellas la de incluir la citada cate-

goría de consumidor «vulnerable severo» en el epígrafe de «suministros esenciales», es decir, aquellos a los no se les puede suspender el suministro. Respecto al nuevo modelo de financiación del bono social, éste será costeado por todas las comercializadoras eléctricas y no sólo, como ocurría hasta ahora, por las que tiene además actividades de producción y distribución. El Tribunal Supremo se pronunció recientemente en contra de ese modelo de financiación por considerarlo discriminatorio.

PRESTACIONES ■ LAS DE JUBILACIÓN Y VIUDEDAD SON LAS MÁS NUMEROSAS

El gasto en pensiones sube un 3% por octavo mes consecutivo

El gasto del Estado en pensiones sigue disparado y suma ocho meses consecutivos con incrementos mensuales mayores del 3%. El resultado es que en diciembre registró un nuevo récord al dedicarse 8.623 millones de euros al pago de estas prestaciones contributivas, con un alza interanual del 3,14%. Siete de cada 10 euros se destinaron al pago de pensiones por jubilación (6.078 millo-

nes). Son las más numerosas de un sistema público (5,78 millones de expedientes) que abonará este mes de diciembre 9,47 millones de prestaciones contributivas, un 1,2% más que hace un año, y otro nuevo máximo tras encadenar 11 meses seguidos con subidas superiores a un punto porcentual.

Las siguientes por volumen son las de viudedad (2,36 millo-

nes de beneficiarios y 1,51 millones de euros), seguidas de las pensiones por incapacidad permanente (944.600 expedientes con un gasto de 880 millones).

Las que más crecen son las prestaciones por jubilación, tanto en afectados (un 1,7%, solo superadas por el alza del 2,3% en las pensiones cedidas a familiares) como en el dinero pagado (un 3,8%, más del doble del incremen-

to de las ayudas por viudedad). Las pensiones medias más bajas han sido las del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), con 381,1 euros, y la de los trabajadores autónomos, con 703,4 euros.

Por comunidades

Por comunidades autónomas, las pensiones medias más altas

Las más bajas han sido las del SOVI, con 381 euros, y la de autónomos, con 703 euros

han sido las de País Vasco (1.128,9 euros), Madrid (1.076,3 euros), Asturias (1.073,7 euros), Navarra (1.043,7 euros), Aragón (955,3 euros), Cantabria (955 euros), Catalunya (944,5 euros) y Ceuta (923,5 euros).

Por debajo de la pensión media del sistema (910,24 euros) se han situado en cambio las comunidades de Castilla y León (894,4 euros), La Rioja (884 euros), Melilla (856 euros), Baleares (840,5 euros), Castilla-La Mancha (840,4 euros), Canarias (839,8 euros), Comunitat Valenciana (838,5 euros), Andalucía (818,3 euros), Murcia (800,1 euros), Galicia (768,4 euros) y Extremadura (758,1 euros).

L'APUNT El bolet al·lucinogen

Anna Ballbona

N'hi ha que s'entesten a diferenciar entre els "problemes reals de la gent" i el sobiranisme. Caldria preguntar-los quins problemes tenen al cap, perquè, per exemple, l'R-3 encara no està desdoblada i no hi ha TAV per anar a València. N'hi ha que pinten el sobiranisme –l'espai pro referèndum– com un bolet al·lucinogen obcecat en una sola idea. M'agradaria que expliqués-

sin com és que ahir el Parlament va aprovar una nova llei contra l'emergència en habitatge que substitueix la suspesa pel TC. També podrien explicar com és que la majoria de la llei es va aprovar per unanimitat. Bé, els ho diré jo: en els ajuntaments on governen tots es troben aquests problemes davant dels morros, i aleshores no hi ha excuses constitucionals que valguin.



Consum demana informació dels talls a les elèctriques

■ La primera onada d'inspeccions revisarà els avisos i els talls de llum i gas del novembre ■ Notifiquen 57 sancions a les companyies a partir de les denúncies

Sònia Pau
BARCELONA

L'Agència Catalana de Consum (ACC) ha demanat informació a les companyies subministradores d'electricitat i de gas sobre tots els talls de servei que van fer el mes de novembre i també sobre tots els avisos als clients en què se'ls advertia de possibles talls. Així, el govern comença una campanya d'inspeccions a les elèctriques, un dels compromisos que va adquirir el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, en una reunió el 18 de novembre amb l'Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) i la Taula del Tercer Sector Social en un seguit de mesures per evitar que hi hagi talls en llars en situació de vulnerabilitat.

Les inspeccions han de certificar si es compleix el principi de precaució que marca la llei 24/2015 que indica que cal consultar els serveis socials bàsics abans de fer un tall. La mort de la Rosa, una dona de 81 anys de Reus (Baix Camp) a la qual Gas Natural havia tallat la llum i que s'il·luminava amb espelmes que van causar un incendi mortal, va encendre a principis de novembre tots els senyals d'alarma.

Aquesta setmana s'ha demanat per carta a les dinou empreses subministradores no només la llista dels talls efectuats, sinó també dels avisos de talls per impagament. En cada cas, a banda de les dades del titular i de les dates de



Mobilització contra la pobresa energètica a Manresa per la mort de Reus ■ EL PUNT AVUI

La xifra

38.777

interrupcions de subministraments bàsics en llars vulnerables es calcula que s'han evitat amb la llei 24/2015.

cada comunicació, es demana informació per saber si es va fer la consulta prèvia als serveis socials municipals per veure si hi havia un risc social. Les companyies tenen 10 dies hàbils per enviar la informació al govern comptats a partir de l'endemà d'haver rebut la sol·licitud.

Les entitats socials i l'APE van valorar positivament l'anunci de la campanya inspectora del conseller Baiget perquè consideren que es fa un pas endavant,

ja que fins ara s'havia actuat només a partir de les denúncies dels afectats de talls indèguts. Des de l'entrada en vigor de la llei 24/2015 s'han rebut 206 denúncies de talls que suposadament no s'adequaven a la norma (fa un mes eren 195), de les quals 117 han generat expedients. Després de la investigació corresponent, l'Agència Catalana de Consum ha corroborat 57 talls indèguts de llum i gas i ja s'ha notificat la sanció a la companyia.

Fonts del Departament d'Empresa i Coneixement van assegurar ahir que, a més d'engegar les inspeccions, els responsables del departament continuen mantenint reunions de seguiment tant amb les subministradores com amb les entitats socials que acompanyen les persones

vulnerables.

Un altre aspecte reclamat per les entitats que s'ha posat en marxa és la campanya informativa a la ràdio i la televisió per difondre els drets dels consumidors per protegir-se de la pobresa energètica. Una campanya que es reforçarà a principis de l'any vinent amb la difusió de díptics informatius que es distribuïran en punts estratègics com ara centres d'atenció primària (CAP) i centres cívics.

El govern va aprovar fa un mes la posada en marxa de dos grups de treball per lluitar contra la pobresa energètica: un està encarregat de fer una proposta de bo social per traslladar-lo al govern de l'Estat i l'altre ha d'elaborar un document en què es concreti una estratègia de prevenció. ■

protocol, en demanar-li-ho Unesa (Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica). La jutgessa del contenciós 2 ventila aquesta discrepància dient que no sap en quins termes va plantejar la mesura aquesta patronal. Finalment, la jutgessa obliga l'Agència Catalana de Consum que publiqui al seu lloc web la suspensió cautelar del protocol.

El conseller Baiget va deixar clar ahir que presentaran recurs contra aquesta resolució, i que els serveis jurídics del departament decidiran si ho fan davant la mateixa magistrada o ja directament a

l'Audiència de Barcelona. També va insistir que seguiran fent complir el protocol, i les empreses que no alertin els serveis municipals seran sancionades. Les entitats socials i l'APE també van reiterar ahir que la llei de pobresa energètica està en vigor, malgrat la resolució.

Les companyies volen forçar el govern a desenvolupar un reglament, que també poden denunciar, mentre el govern no s'avingui a aclarir qui ha d'assumir la factura de les persones sense recursos. La Generalitat no es renuncia a assolir convenis i repartir responsabilitats. ■